

- **Procedimiento N°: PS/00114/2021**

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 23 de febrero de 2021, tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos un escrito presentado por **AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT** (en lo sucesivo, la parte reclamante), mediante el que formula reclamación contra **A.A.A.** con NIF *****NIF.1** (en adelante, la parte reclamada), por la instalación de un sistema de videovigilancia instalado en *****DIRECCION.1**, existiendo indicios de un posible incumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

La parte reclamada aporta copia de Acta Denuncia cumplimentada por Agentes de la Policía de la localidad con fecha 19 de febrero de 2021 en la que se indica:

*“Durante el servicio somos requeridos por un vecino de la ***DIRECCION.1 quien nos advierte de la presencia desde hace tiempo de una cámara de videovigilancia existente en la fachada del inmueble de la ***DIRECCION.1 dudando de su legalidad.*

En el domicilio no hay persona que nos dé razón de la cámara.

Se recogen los datos del morador de la vivienda según los datos del padrón de habitantes de esta localidad.”

Adjunta reportaje fotográfico.

SEGUNDO: Esos hechos ya fueron objeto de reclamación ante esta Agencia a través de *****ORGANISMO.1**, tramitándose el expediente E/06050/2020.

Desde esta Agencia se comunicaron a la parte reclamada los requisitos exigidos para llevar a cabo tratamientos de datos personales, indicándole que, en el supuesto de no adoptar las medidas necesarias para cumplir con esos requisitos, incurriría en una infracción de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, que podría dar lugar al inicio de las actuaciones de investigación y sancionadoras correspondientes.

TERCERO: La reclamación fue admitida a trámite mediante resolución de 12 de marzo de 2021.

CUARTO: Con fecha 14 de mayo de 2021, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador al reclamado, por la presunta infracción del artículo 5.1.c) del RGPD, tipificada en el artículo 83.5 del RGPD.

QUINTO: Con fecha 09 de junio de 2021 se reciben en esta Agencia alegaciones al acuerdo de inicio formuladas por el reclamado en las que señala, en síntesis, que la cámara es está desconectada.

Aporta una fotografía en la que aparece el dispositivo desenchufado y otra del interior del mismo en el que indica que no se almacenan datos.

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Instalación de una cámara de videovigilancia en la fachada del inmueble del reclamado.

SEGUNDO: El responsable del dispositivo es **A.A.A.** con NIF *****NIF.1.**

TERCERO: El reclamado declara en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio que la cámara está desconectada, aportando fotografías en las que se observa que el dispositivo está desenchufado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autoridad de control, y según lo establecido en los arts. 47 y 48.1 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos es competente para resolver este procedimiento.

II

En el presente caso, se procede a examinar la reclamación de fecha 23 de febrero de 2021 por medio de la cual se traslada como hecho principal la colocación de una cámara de videovigilancia en la fachada del inmueble donde reside el reclamado.

El art. 5.1 c) del RGPD dispone que *“Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»)”*.

Cabe recordar que los particulares son responsables de velar por que los sistemas instalados se ajusten a la legalidad vigente, acreditando que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos por la normativa en vigor.

La instalación de este tipo de dispositivos debe contar con el preceptivo cartel informativo, indicando los fines y responsable del tratamiento en su caso de los datos de carácter personal.

El artículo 22.4 de la LOPDGDD dispone que:

“El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información”.

En todo caso, las cámaras deben estar orientadas hacia el espacio particular, evitando intimidar a vecinos colindantes con este tipo de dispositivos, así como controlar zonas de tránsito de los mismos sin causa justificada.

Tampoco con este tipo de dispositivos se puede obtener imágenes de espacio público, al ser esta competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Conviene recordar que aun el caso de tratarse de una cámara “simulada” la misma debe estar orientada preferentemente hacia espacio privativo, dado que se considera que este tipo de dispositivos pueden afectar a la intimidad de terceros, que se ven intimidados por la misma en la creencia de ser objeto de grabación permanente.

Por parte de los particulares no se puede instalar aparatos de obtención de imágenes de espacio público, fuera de los casos permitidos en la normativa.

III

El art. 77 apartado 5º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en adelante), dispone lo siguiente: *“Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”.* Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad desplazadas al lugar de los hechos constatan la presencia del sistema.

IV

En fecha 09 de junio de 2021 se recibe escrito de alegaciones del reclamado manifestando que el sistema instalado está desconectado, esto es, no obtiene imagen alguna cumpliendo una mera función disuasoria.

El artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en adelante) dispone: *“Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten”.*

Cabe indicar que los particulares pueden instalar en su propiedad privada cámaras falsas, si bien las mismas deben estar orientadas exclusivamente hacia su propiedad, evitando intimidar con dichos dispositivos a terceros.

La parte denunciada aporta documento que acredita el carácter ficticio de la misma dándose por buenas las alegaciones esgrimidas, siendo consciente que en cualquier momento este organismo puede proceder a comprobar el sistema en cuestión.

En la instalación de este tipo de dispositivos “simulado” se debe adoptar la cautela necesaria para evitar intimidar con los mismos a terceros que desconocen el carácter ficticio de estos, que pueden creer verse grabados por estos, de tal manera que se debe evitar su orientación hacia espacio público.

Aunque en el pasado la AEPD ha sancionado a responsables del tratamiento por el uso de este tipo de dispositivos, actualmente se entiende que el uso de cámaras simuladas no supone una infracción del derecho fundamental a la protección de datos.

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019 declara que la instalación de una cámara de videovigilancia falsa, de apariencia idéntica a otras plenamente operativas, es susceptible de coartar la libertad de terceros.

Razona el TS que cuando un individuo desconoce que está siendo filmado se comporta con una naturalidad y espontaneidad que no se dan en caso contrario. Y que *“el derecho del demandante a la tranquilidad de su vida privada comprende también el de no tener que soportar una incertidumbre permanente”* sobre si la cámara en cuestión es o no operativa, o sobre si “RCRE la ha sustituido por otra plenamente funcional y de apariencia idéntica”.

Por tanto, se debe tener en cuenta que la conducta descrita en caso de resultar excesiva puede tener consecuencias en otros ámbitos del Derecho, siendo recomendable adoptar las cautelas necesarias para evitar una orientación excesiva hacia espacio público, limitándose a la fachada de la vivienda que se trata de proteger.

Igualmente, es recomendable seguir las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de la localidad, que pueden orientarle en la materia en caso de necesitarlo, evitando con ellos nuevas denuncias al respecto.

V

A tenor de lo anteriormente expuesto, no se ha podido acreditar que la cámara objeto de reclamación obtenga imagen alguna de persona física identificada o identificable, al haber declarado el reclamado que la cámara es simulada; por lo que, al no existir tratamiento de datos de carácter personal, no puede hablarse de infracción administrativa en la materia que nos ocupa.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada,

la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR el **ARCHIVO** del presente procedimiento al no quedar acreditada la comisión de infracción administrativa alguna en la materia que nos ocupa.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a **A.A.A.** con NIF *****NIF.1**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

938-131120

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos